

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*S. Lerdo de Tejada.*—*José Arteaga.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero diez y siete de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPAIRO.

De garantías promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan por varios comerciantes de Mérida, contra el C. Gabriel Lujan, rematador del ramo de contribucion impuesta á la venta de licores al menudeo, alegando que los ha embargado, infringiendo algunos artículos constitucionales.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal debe ocuparse en el presente dictámen del punto principal de la solicitud que motiva este expediente contraída á que la justicia nacional que vd. administra, ampare y proteja á los comerciantes que la suscriben contra los actos del rematador del ramo de contribuciones impuestas por el gobierno del Estado á la venta de los licores espirituosos al menudeo; y contra la disposicion del ejecutivo, fecha 23 de Junio de 1868, en que se funda para obligarlos á quitar de sus respectivos aparatos los embaces en que se encuentran dichos licores como muestras de los que no les está prohibido vender al por mayor. Los peticionarios apoyan su ocurno en los artículos

14, 16, 22 y 27 de la Constitucion, y en el 1º, fraccion 1ª, de la ley suprema de 20 de Enero de 1869.

El informe que sobre este punto ha rendido el funcionario responsable, despues de haber sido resuelto negativamente el de la suspension inmediata de los actos reclamados, que desde luego promovieron los quejosos, no destruye el fundamento esencial de su solicitud; pues aunque el infrascrito no convieno en que se hubiesen violado todos los artículos del pacto federal que se citan, y con ellos las garantías individuales que protegen, sí cree que se ha infringido el 16: lo cual es bastante para otorgar el amparo invocado. Y en efecto, suponiendo que la enunciada disposicion de 23 de Junio tuviese toda la fuerza obligatoria de que carece por haberla dictado el ejecutivo del Estado en pleno periodo constitucional, y no hallarse comprendida entre los actos de él aprobados por decreto de la II. legislatura, expedido en 17 de Julio del mismo año 1868, ni en ese caso podria considerarse exenta de la anticonstitucionalidad que se le atribuye; porque autoriza á un simple rematador á molestar en sus posesiones á cualesquiera de los quejosos, lo mismo que á todo ciudadano que se encuentre en el caso de ellos, toda la vez que se le antoje suponer que en los frascos ó botellas de su establecimiento se encuentran licores espirituosos destinados á su venta por menor; pues en virtud de esa facultad se entregaria, siempre que quisiese á practicar una visita domiciliaria, una verdadera requisicion, haciendo abrir embaces sospechosos para cerciorarse de que el líquido no entra en la nomenclatura de los perseguidos. Y esta molestia, que es de las mas grandes que el individuo puede sufrir en sus posesiones, al mismo tiempo que en su persona pues que los distraeria algunas horas de otros trabajos mas provechosos en el ejercicio de su industria, se verificaria sin las formalidades prescritas para estos casos por el art. 16 de la Constitucion;

porque un rematador de cierto ramo de contribuciones, no es autoridad competente para ordenar esos cateos que ocasionarian dichos perjuicios materiales y personales, y que los mismos jueces competentes, cuando en muy raro, decretan, no verifican sino mediante un municipio del lugar, ademas del escribano, que evite la extralimitacion del acto en menoscabo del respeto que se debe al hogar doméstico y á los derechos del ciudadano.

Pero aun cuando se supusiese con legítima jurisdiccion y competencia al rematador para dictar tan perjudiciales providencias, y las ejecutase con los indicados requisitos que establece el derecho comun, nunca podría fundar y motivar el procedimiento, pues que no puede sostenerse seriamente que sea causa legal de él la inquisicion del contenido de unas botellas, ó del puesto que deben ocupar en la casa del comerciante propietario de ellas.

Si la venta de los licores espirituosos estuviese prohibida en principio, seria tolerable ese constante amago contra los que tienen abiertos sus establecimientos al mercado público; pero siendo así que el comercio de ese artículo es lícito, y tanto, que los mismos comerciantes quejosos pueden enagenarlo por mayor, como de los que forman su capital en giro por el cual les está impuesta una cuota que satisfacen al erario del Estado, no parece justo ni legal que á causa de no convenir á sus intereses ó de no querer pagar la que tambien se les impone por el expendio al menudeo del mismo efecto, queden privados del derecho de colocar en sus aparatos embaces de cualquier género que contengan de aquellos licores una muestra para exhibir prontamente al comprador, ó bien sea como un adorno llamativo de la atencion de los transeuntes para conseguir numerosa concurrencia á sus tiendas. Es esta, en último análisis, una cuestion de ornato privado que debe dejarse el arbitrio de cada quien y en la cual no debe entrometerse al rema-

tador del ramo de contribuciones de que se trata, sin que él, y la disposicion de que deriva sus actos, reclamados por los quejosos, violen las garantias que otorga el artículo 16 de la constitucion. El fiscal reconoce, que el gobierno del Estado ha estado en la plenitud de su derecho al sacar á remate el producto de ese ramo de contribuciones; acepta así mismo, que al rematador, quien quiera que sea, se le trasmita la facultad económico coactiva de que se halla investido el mismo Tesorero general para hacer efectivo el pago de ellas; pero lo que el infrascripto no puede admitir, es, que sea conforme con los preceptos del código fundamental de la república esa disposicion de 23 de Junio, del ejecutivo del Estado que coloca á los comerciantes en la alternativa de pagar por la venta al menudeo de licores espirituosos una fuerte asignacion ó de bajar de sus mostradores, y guardar donde no se vean, las pequeñas cantidades que de ellos contienen estos ó los otros frascos. Esta disposicion, si se aplica en su último extremo, envuelve una mortificacion tan grande al individuo á causa de las pesquisas y cateos constantes que habian de practicarse para ejecutarla, que casi seria propiamente una pena que, conforme á los principios de legislacion universal, no pueden aplicarse ántes de la perpetracion del delito.

Que el C. Gabriel Lujan tenga la mas esquisita vigilancia para evitar que se cometa el fraude que tome con perjuicio de sus intereses, que imponga á los infractores de la ley todo el rigor del castigo á que se hayan hecho acreedores si venden licores espirituosos al menudeo sin pagar la cuota correspondiente; pero que no prohiba lo que en sí no es ilícito; que no cause molestias á los ciudadanos, en sus personas y posesiones, á trueque de los cuidados que debe tener para el buen éxito de su negociacion: él, en fin, no es justo que goce de comodidades como rematador que cobra, á expensas del contribuyente que paga.

Por todas estas consideraciones, y fundado en el artículo 16 de la constitucion general de la República y en la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el fiscal pide á usted se sirva fallar en definitiva el presente juicio declarando que: la Justicia de la Union ampara y protege á los ciudadanos comerciantes signatarios del ocurno en que lo han promovido contra los actos del C. Gabriel Lujan, rematador del impuesto de contribuciones decretado por la venta al menudeo de licores espirituosos, que los obliga á quitar de sus respectivos aparatos, las muestras de aquellos efectos de comercio por no pagar las cuotas que los ha asignado por dicha venta; y cuyos actos proceden de la repetida disposicion local de 23 de Junio de 1868 que, como cree haber demostrado el infrascrito, es anticonstitucional.

Mérida, Enero diez y siete de mil ochocientos setenta y dos.—*P. Higuerales.*

Sentencia del C. juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Enero veinticuatro de mil ochocientos setenta y dos.

Visto este juicio de amparo promovido por los CC. Manuel Zapata, Pedro Sierra y demas compañeros, del comercio de esta ciudad, contra el C. Gabriel Lujan, rematador del ramo de contribucion impuesta á la venta de licores al menudeo, alegando que los ha embargado con infraccion de los artículos 14, 16, 22 y 27 del código fundamental de la República. Visto que se negó la suspension del acto reclamado; el informe del funcionario contra quien se dirige la queja sobre lo principal; el pedimento fiscal; la citacion para sentencia y los documentos acumulados para mejor proveer, con cuanto mas ver y tener presente convino.

Considerando: que el amparo se ha pedido contra el rematador Lujan no en virtud

de la ley que le dá la facultad económico coactiva, sino porque se dice haber aplicado la disposicion del ejecutivo local de 23 de Junio de 1868: Que ajustó sus procedimientos de embargo á la ley del Estado de 3 de Octubre último que lo inviste de dichas facultades económico coactivas, la cual ley no se arguye de anticonstitucional; que si al proceder al embargo creyó que los quejosos estaban sujetos á la disposicion dicha del ejecutivo de 23 de Junio, que se dice opuesta á la Constitucion, no ha llegado á aplicarla, porque ha declinado su responsabilidad sujetando la cuestion á la resolucion de juez competente, como lo son los de primera instancia á cuyo conocimiento ha pasado los expedientes respectivos: que dichos jueces al aplicar la ley conforme al art. 126 de la Constitucion general, deben apreciar los daños y perjuicios sufridos por los postulantes en los embargos verificados, si no lo fueron conforme á derecho: que de aquí resulta no haber violado el rematador Lujan ningun precepto constitucional, no habiendo lugar al amparo por no haberse pedido contra la ley en que fundó sus actos de embargo, pues en cuanto á la aplicacion de la disposicion que se alega no ser constitucional, aun no se ha verificado para poder juzgar de ella. Por lo expuesto y conforme á la suprema ley de 20 de Enero de 1869, la autoridad falla:

Primero; que no ha lugar al amparo solicitado por los quejosos contra el rematador de la contribucion impuesta á la venta de licores al menudeo, por no haber infringido ningun precepto constitucional en el embargo que los ha hecho.

Segundo; sáquese testimonio de esta fallo para publicar y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia Nacional, para su revision, conforme á los artículos 13 y 27 de la citada ley de 20 de Enero.

Hágase saber.—*I. Manzanilla.*—Ante mí. *José Anacleto Castillo.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Febrero veinte de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por los comerciantes de Mérida R. Cárdenas Salas y C^a, Pedro Buero, Manuel Zapata, Y. Mendiuti, Palma y hermano, P. Gándarillos y C^a, Luis Fuente, José M^a Fuente, Melquiadés Mena, Espinosa y Carrillo y A. & D. Duarte Z., contra el rematador de cuotas del expendio de licores al menudeo C. Gabriel Lujan, quien se ha presentado al ojeutarlos por la cuota de 20 pesos mensuales á cada uno y sus recaigos, en virtud de la facultad económico coactiva, con cuyo acto consideran violadas las garantías que protegen los artículos 14, 16, 22 y 27 de la Constitución federal.

Considerando: que esa cobranza procede de lo que disponen los decretos del Estado de Yucatan de 26 de Enero de 1859, 30 de Agosto de 1867 y 23 de Junio de 1868; que por este se conceden á los rematadores de cualquier ramo que pertenezca á la hacienda del Estado, la facultad económico coactiva: que el rematador Lujan ha sujetado la cuestion á la resolucion de jueces competentes, pasando á ellos el conocimiento de los expedientes respectivos con arreglo á lo que disponen las leyes generales que conceden la facultad económico coactiva á algunos agentes de las oficinas de hacienda entre los que se encuentra en el caso el C. Gabriel Lujan, y que por lo mismo este ha procedido dentro de la órbita de sus atribuciones.

Considerando además, respecto de los comerciantes Espinosa y Carrillo, que al notificárseles la sentencia del juez de Distrito que niega el amparo, expusieron que habiendo disuelto su sociedad se desisten del amparo solicitado, se decreta:

Primero; que se confirma la sentencia pronunciada por el juez de Distrito de Yu-

catán el 24 de Enero próximo pasado que declara que no ha lugar al amparo solicitado por los quejosos contra el rematador de la contribucion impuesta á la venta de licores al menudeo, por no haberse infringido ninguna garantía constitucional en el embargo que les ha hecho.

Segundo; que se hán por desistidos á Espinosa y Carrillo del presente juicio, y que en consecuencia no se los ampara ni protege en el presente caso.

Tercero; devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*L. Guzman.*—*Luis M^a Aguilar,* secretario.

Don copias que certifico. México, Febrero veintitres de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO

De garantías individuales promovido ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara por el C. Miguel Marroquín, contra el acto del C. coronel Felipe Maximin que lo obliga á servir contra su voluntad en clase de soldado.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

Señor Juez de Distrito.
El Promotor fiscal dice: el soldado del